

Territorios y recursos naturales: el saqueo versus el buen vivir

Broederlijk Delen 



Quito, abril 2008

**Territorios y recursos naturales:
el saqueo versus el buen vivir**

Producción: *Broederlijk Delen*

Edición: *Agencia Latinoamericana de Información - ALAI*

Revisión de textos: *Sally Burch, Eduardo Tamayo G., Juan Pablo Corral*

Corrección: *Paola de la Vega*

Ilustración de portada: *Jano*

Diseño de portada: *Verónica León*

Diseño y diagramación: *Serafín Ilvay*

Impresión: *Gráficas Silva*

ISBN: 978-9942-01-660-7

Quito, abril 2008

Broederlijk Delen

Huidevettersstraat 165

1000 Brussels, Bélgica

T. (32) (0)2/502.57.00 F. (32) (0)2/502.81.01

info@broederlijkdelen.be

<http://www.broederlijkdelen.be/>

Agencia Latinoamericana de Información - ALAI

Casilla 17-12-877

Quito, Ecuador

T. (593 2) 250 2074 F. 250 5073

info@alainet.org

<http://alainet.org>

Los artículos y las opiniones vertidas en este libro son de estricta responsabilidad de sus autores/as y no reflejan necesariamente el pensamiento de las entidades editoras. Pueden ser reproducidos, a condición de que se mencione debidamente la fuente.

Indice

<i>Introducción. Las venas (re)abiertas de América Latina</i>	5
<i>Prefacio, Joan Martínez Alier</i>	11
I. Visiones e intereses en disputa	
Los recursos naturales como mercancía, <i>Marco Arana Zegarra</i>	19
De deudores a acreedores, <i>Aurora Donoso Game</i>	32
La madre naturaleza desde la cosmovisión Maya, <i>Rodolfo Pocop Coroxon</i>	39
II. Tendencias político-económicas en el control y manejo de los recursos naturales	
Los alcances de la deuda ecológica, <i>Hildebrando Vélez</i>	49
Plan Colombia, plan de muerte, <i>Diana Murcia</i>	57
Guatemala: Libre comercio y TLC versus integración de los pueblos, <i>Natalia Atz Sunuc</i>	66
Ecuador. Desplazamiento y muerte: la otra cara de la represa Baba, <i>Germán Jácome López</i>	72
III. Estrategias de defensa de los recursos naturales	
La justicia ambiental en la estrategia del ecologismo popular, <i>Lucio Cuenca</i>	79
Las luchas del ecologismo popular en Ecuador, <i>Alexandra Almeida</i>	85
Colombia: Las nuevas soberanías, <i>Hildebrando Vélez</i>	92
La minería en Honduras: un atentado contra la salud pública, <i>Juan Almdares</i>	98

Dos casos de resistencia a la contaminación tóxica en el Ecuador, <i>Esperanza Martínez</i>	106
Ecuador: La lucha de Sarayaku contra las petroleras, <i>Betsy Santi Gualinga</i>	112
Desde lo local a lo mundial en defensa de los bosques, <i>Ricardo Carrere</i>	115
Bolivia: Defensa del territorio frente a la Repsol, <i>Rubén Cuba</i>	122
Bolivia: Control comunitario de los recursos naturales, <i>Fernando Garcés</i>	130
Redes del Norte: Aliadas estratégicas, <i>Geneviève Tournon</i>	134
El caso del Congo: “celular sin sangre”, <i>Thomas Craenen</i>	137
Transparencia y rendición de cuentas, <i>Laura Furones Fragoso</i>	141
Responsabilidad social empresarial: Maquillando el saqueo, <i>César Padilla</i>	146

IV. Alternativas para un manejo sostenible

La soberanía en tiempos de globalización <i>Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres</i>	155
Uso alternativo de las fuentes energéticas en Cuba <i>Ángel Luis Brito Sauvanell</i>	166
Colombia: Los recursos naturales desde la espiritualidad e interculturalidad <i>Aparicio Ríos</i>	170
Bolivia. Defensa colectiva de los derechos socio-ambientales, <i>Elizabeth López</i>	181
Un camino alternativo: El Tratado Comercial de los Pueblos, <i>Miguel Lora</i>	184
Hacia una sociedad post-petrolera, <i>Elizabeth Bravo</i>	196
Petróleo, rentismo y subdesarrollo: ¿una maldición sin solución? <i>Jürgen Schuldt, Alberto Acosta</i>	204

III. Estrategias de defensa de los recursos naturales

La justicia ambiental en la estrategia del ecologismo popular

*Lucio Cuenca
OLCA - Chile*

“...lo que no nos gusta es cuando se dice que la peor causa de contaminación es la pobreza; a lo que nosotros debemos responder diciendo que siempre fuimos pobres, y que lo peor que nos puede llegar a suceder es permitir que nos contaminen esa pobreza”.

Lídoro Leiva, intendente de Famatina

En los últimos años, hemos desarrollado una propuesta que se ha construido al calor de una serie de procesos de resistencia y de fortalecimiento del trabajo coordinado en defensa de los derechos ambientales, de los recursos naturales y, por supuesto, en defensa de las comunidades y de las culturas, que permanentemente están siendo violentadas por este modelo.

Es una propuesta que surge del diagnóstico crítico sobre la actual insustentabilidad ambiental del modelo económico en sus

diversos niveles, y en cuyo orden nuestros países siguen trabajando para satisfacer la demanda de una economía de sobre-consumo y de apropiación injusta y desproporcionada de los recursos.

Por un lado, la injusticia ambiental forma parte de los efectos de una política específica de distribución y manejo de los recursos naturales y las condiciones ambientales de riesgo para nuestros pueblos. Hoy en día, no sólo hay un saqueo de nuestros recursos, sino también un claro deterioro de las

condiciones de calidad de vida de las poblaciones que han sufrido el impacto –en muchos casos, irreversible– de la contaminación ambiental.

Por otro lado, la justicia ambiental no tiene que ver solamente con las luchas por la defensa de los recursos naturales, o con las externalidades del modelo, sino también –y fundamentalmente– con el tema de la justicia y los derechos ambientales, reconocidos como parte del conjunto de los derechos humanos y de los derechos económicos, sociales y culturales.

En muchos de nuestros países, lamentablemente, estos derechos están siendo conculcados todos los días por unas democracias secuestradas por los procesos de integración comercial que impulsa la globalización, y cuya principal estrategia es la firma de los Tratados de Libre Comercio, los cuales buscan garantizar para las transnacionales y los países del primer mundo lo que para nosotros significa el saqueo de los recursos, la exclusión y la injusticia en todas sus dimensiones.

Esta pérdida de soberanía no sólo se ha gestado a través de los TLCs, sino también a través de acuerdos bilaterales, como, por ejemplo, el firmado entre Chile y Argentina, cuyo propósito fue facilitar la explotación minera en la zona de frontera de la Alta Cordillera de los Andes, con la entrega de territorio para que estas zonas sean admi-

nistradas íntegramente por las empresas mineras, consagrando así el secuestro de nuestras democracias y eliminando el derecho de nuestros países a decidir en esta materia.

La venta de servicios ambientales está también dentro de esta misma lógica, en la que, por ejemplo, a través de la emisión de bonos de carbono se acepta que se siga contaminando y poniendo en riesgo la vida misma de nuestras comunidades.

Frente a este saqueo, los procesos de resistencia y defensa de los derechos humanos y ambientales de los movimientos sociales se han multiplicado, pero, lamentablemente, éstos están siendo perseguidos, reprimidos y criminalizados con la aplicación de leyes antiterroristas, de seguridad interior del Estado, que fueron desarrolladas por regímenes autoritarios, no sólo en Chile, sino en muchos países de la región.

Chile: el mejor ejemplo de las peores prácticas

En Chile, en 15 años de transición a la democracia, no se han generado cambios profundos en el sistema político que fue impuesto en tiempos de la dictadura militar. Las reformas menores que se han incluido siguen garantizando una sobre representación de la derecha, y, en consecuencia, de los intereses transnacionales y de los grupos económicos chilenos. Esto ha permitido

que se siga profundizando el modelo neoliberal e incrementando la deuda ecológica y social en nuestro país.

Los índices macroeconómicos hablan de un incremento del doble en las exportaciones, en los últimos cinco años, gracias a la firma de varios tratados comerciales, no sólo con EE.UU., sino también con otros bloques de países o con otros países en tratados bilaterales. Por supuesto, para algunos estas cifras representan las señales inequívocas del “progreso”, pero nadie dice que detrás de ellas se esconden la sobreexplotación y la entrega de nuestros recursos naturales a las grandes economías del planeta.

Algunas personas están interesadas en mostrar estas cifras, pero a su vez esconden otras que muestran las consecuencias de este modelo. Por ejemplo, aquella que ubica a Chile entre los diez países del mundo con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza. Como podemos comprobar, las cifras no muestran a Chile solamente como modelo de crecimiento económico, sino también como modelo de crecimiento de la injusticia.

En Chile, de cada USD 100 generados por las exportaciones, 82 provienen de los recursos naturales, principalmente, de la minería, los recursos forestales, la agroindustria y, también, de una incipiente pero “exitosa” industria acuícola. Por supuesto, estos índices sólo se pudieron alcanzar gra-

cias a la vigencia de un código de regulación de los recursos naturales (Código de Aguas, Código Minero, Ley de Pesca y Acuicultura, Ley Forestal, etc.), creado en la dictadura de Pinochet.

El sector forestal: un caso emblemático de injusticia ambiental

En Chile, las mayores expresiones de injusticia ambiental están vinculadas con los procesos de extracción de los recursos forestales para la exportación, cuyas devastadoras consecuencias las están asumiendo los sectores más vulnerables del país: indígenas, pescadores artesanales y campesinos, junto a otras comunidades urbanas.

El sector forestal se desarrolla y potencia desde el año 74 –en la época de la dictadura– con el impulso de los monocultivos de pino y eucalipto, y, posteriormente, con la industria de celulosa para la fabricación del papel.

Hoy en día, las empresas forestales en Chile cuentan con 2.3 millones de hectáreas, aproximadamente, de pino y eucalipto, ubicadas en las zonas del centro sur del país, en las regiones del Bío Bío y Araucanía, donde se concentra la mayor cantidad de población indígena.

Precisamente, esta zona se ha caracterizado por tener una vegetación densa y un clima muy lluvioso; sin embargo, a partir de

la expansión forestal ha sufrido graves alteraciones climáticas: bosques depredados, suelos erosionados, contaminación con plaguicidas y extinción irremediable de fuentes de agua, ríos y vertientes. Como consecuencia, la población local se ha visto obligada a migrar. El último censo nacional (período 1992 - 2002) en las comunas con predominio forestal, mostró que la población ha disminuido hasta en un 16%, cuando en el mismo período el crecimiento promedio de la población en Chile fue del 12,8%. Estos datos son coincidentes y equiparables con los niveles de emigración en la relación población mapuche y concentración forestal.

Pero esto no sólo está ocurriendo en Chile; ahora existe un proceso de expansión de



Mancha de contaminación en el Río Valdivia, provocada por los desechos tóxicos de Celulosa Arauco. Foto Acción por los Cisnes.

una serie de proyectos de gigantescas plantas de celulosa en Uruguay, Brasil y en otros países del Sur, no sólo como consecuencia del crecimiento de esta industria, sino también como parte de un traslado de dichas industrias del Norte al Sur (América del Sur, Asia y África).

En Chile existen ocho plantas de celulosa, cuya producción alcanza casi cinco millones de toneladas anuales; su propiedad la concentran dos grupos económicos nacionales. De todas ellas, es emblemático el caso de la Planta Valdivia de Celulosa Arauco: en 2004, a ocho meses de iniciado su funcionamiento, causa un desastre ambiental en un humedal en el Río Cruces, área protegida considerada como “Santuario de la Naturaleza” que forma parte de la Convención Ramsar, en calidad de “humedal de interés internacional”. En este curso de agua la planta de celulosa descarga sus residuos industriales líquidos. Así, de nada sirvió el título de “área protegida” que ostenta, pues la industria forestal ya ocasionó la primera gran catástrofe ecológica: prácticamente exterminó, entre otras, la especie de cisnes de cuello negro, y colapsó las condiciones de vida de la población local, sobre todo contaminando el río que avanza hacia el interior de la ciudad de Valdivia, y cuya agua se utiliza para el consumo de la población y del turismo, una de sus principales actividades económicas. Lo más grave de todo esto es que el modelo chileno sirve actualmente de ejemplo para la construcción de nuevas plantas de celulosa en toda la región.

Respuesta social al sector forestal

La respuesta del pueblo Mapuche, frente a esta situación extrema, ha sido la de movilizarse para denunciar y visualizar su lucha en contra de la expansión de las plantaciones forestales.

Desde hace dos años, las movilizaciones en ciudades y zonas rurales, en contra de las plantas de celulosa, si bien no han logrado todavía impedir que éstas se construyan en su territorio, han conseguido, por lo me-

Hay que salir a educar a los de afuera, porque nos matan todavía, porque nos desconocen, porque nadie les habla de la riqueza de nuestra cultura, que es la prueba de que no somos pobres, de que no somos analfabetos. La mayoría de nuestras comunidades hablan dos idiomas: el propio que es el primero que se aprende, y el español. Por supuesto, no pertenecemos al mismo sistema, tenemos nuestro territorio, nuestro sustento, nuestra cultura, que si no la fortalecemos con nuestra identidad, siempre nos vamos a considerar pobres e indefensos, porque eso es lo que los Estados quieren que pensemos: ¡pobres indios!, ¡analfabetos!, ¡viven en casuchas!, ¡no tiene hospitales!. Pero no saben que nosotros tenemos chamanes; todos los ancianos son maestros científicos; incluso, Occidente ha aprendido mucho de los indígenas en el campo de la medicina, por ejemplo.

nos, limitarlas en sus procesos de destrucción y contaminación de la naturaleza.

Un caso de resistencia que hay que resaltar es el emprendido por una red de aproximadamente 2000 pescadores artesanales en la zona de Mehuin, quienes se opusieron durante casi tres años (de 1996 a 1998) a la decisión del Gobierno de Ricardo Lagos de evacuar los desechos del Santuario de Valdivia en el mar, frente a sus costas.

Hoy en día, la gente de la región ha perdido toda su confianza en la institucionalidad, al extremo de ni siquiera permitir el ingreso de los técnicos para que realicen los estudios de impacto ambiental.

Desde esta perspectiva, nuestra meta es la de articular actores sociales que exijan y ejerzan directamente sus derechos, y no como ocurrió durante muchas décadas en Chile, a través del liderazgo de algunas ONGs. Ahora, la defensa directa de los derechos por la justicia es un componente

fundamental en la lucha de los movimientos sociales.

Nuestra propuesta apunta, entonces, a coordinar y fortalecer la resistencia conjunta de los diferentes movimientos en contra de la injusticia ambiental. Para ello, es necesario elaborar mapas de carácter local, nacional y regional que identifiquen la ubicación de aquellos conflictos de injusticia ambiental en la región, para luego coordinar acciones de recuperación de derechos, intercambiar experiencias y desarrollar alternativas al modelo neoliberal, y que incorporen en su visión la justicia socio-ambiental como un derecho irrenunciable.

Lucio Cuenca Berger es ingeniero, coordinador del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), una institución comprometida con los derechos de las mujeres, los hombres y las comunidades en su defensa del medio ambiente. OLCA centra su esfuerzo en el seguimiento y apoyo a comunidades en conflicto ambiental.